

**SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO  
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO  
A LA SENTENCIA T-454 de 2023**

**Expediente:** T-8.953.026

Solicitud de tutela presentada por *Lina*  
contra la Sociedad de Activos Especiales.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la mayoría, presento las razones de mi salvamento de voto a la decisión adoptada en la Sentencia T-454 de 2023, en la que la Sala Quinta de Revisión decidió confirmar la providencia del juez de tutela de segunda instancia y, con ello, reiterar la improcedencia del amparo, al considerar incumplido el requisito de inmediatez respecto de las pretensiones presentadas en contra de la sentencia de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que ordenó la extinción de dominio sobre un inmueble en el que fueron hallados 421 gramos de marihuana escondidos por uno de los hijos de la propietaria. En esta oportunidad, sobre las pretensiones dirigidas en contra de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Sala Quinta también declaró la carencia actual de objeto por la configuración de un hecho sobreviniente.

Considero que el estudio del caso debió efectuarse de forma global y no fragmentar el análisis de las pretensiones contra la sentencia que ordenó la extinción de dominio del inmueble y las dirigidas contra las actuaciones posteriores de la SAE. En ese orden, debió hacerse mayor énfasis en que la solicitante también estaba cuestionando la mencionada sentencia y precisarse la calidad con la que actuó la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, es decir, como parte accionada.

Si el estudio se hubiera realizado de manera conjunta, la conclusión sobre el requisito de inmediatez tendría que haber sido reconsiderada, pues lo cierto es que la presunta vulneración ocasionada con la expedición de la sentencia alcanzó su grado de afectación máximo en el momento en que la SAE emprendió las actuaciones para llevar a cabo su materialización con la entrega del inmueble (fase de cumplimiento de la decisión judicial). En otras palabras, la presunta vulneración originada con la sentencia de extinción de dominio permanecería en el tiempo y la fragmentación del estudio del requisito de inmediatez vació su contenido y generó una desatención de los aspectos relevantes del caso.

En el caso concreto, debió tenerse presente que a partir de la sentencia cuestionada inició una vulneración continua que, posteriormente, se concretó cuando la SAE se dispuso a cumplir la fase de ejecución de la sentencia y solicitó la entrega del inmueble, es decir, en marzo de 2022. En ese sentido, la presunta vulneración y la situación desfavorable de la accionante derivada del irrespeto a sus derechos fundamentales, resulta ser continua y actual, por lo que debió tenerse presente lo señalado por esta corporación en la Sentencia SU-184 de 2019:

“En el estudio de la inmediatez, la Corte Constitucional ha entrado [a] racionalizar el debate en torno al tiempo de presentación de la acción de tutela y los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada de las providencias que han sido objeto de acción de tutela. En ese sentido, en el estudio de procedibilidad, la Corte Constitucional ha tenido, entre otros elementos de juicio anteriormente reseñados, **la calidad de la parte accionante de la tutela y la vulneración actual de los derechos fundamentales alegados**” (negritas fuera del texto).

En relación con lo anterior, en la Sentencia SU-016 de 2021, en la que se unificaron las reglas para llevar a cabo las diligencias de desalojo por ocupación irregular de bienes de carácter público, se señaló:

“En efecto, bajo ciertas circunstancias y situaciones de excepcionalidad, el juez puede concluir que la solicitud de amparo invocada después de un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración del derecho fundamental resulta procedente. La jurisprudencia ha identificado tres eventos en los que esto sucede, a saber: (i) cuando se advierten razones válidas para la inactividad, tales como la configuración de situaciones de caso fortuito o fuerza mayor; (ii) en los casos en los que la situación de debilidad manifiesta del peticionario torna desproporcionada la exigencia del plazo razonable y, (iii) excepcionalmente cuando se presenta una **situación de permanencia o prolongación en el tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante** que hace imperiosa la intervención del juez constitucional” (negritas fuera del texto).

Ahora, tras encontrar superado el requisito de inmediatez, debió realizarse el estudio de fondo del caso concreto, en el cual no se podía perder de vista que el artículo 4 de la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio) señala que en los procesos de extinción de dominio “se garantizarán y protegerán los derechos reconocidos en la Constitución Política, así como en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Además, que el artículo 5 de la misma codificación dispone que “[e]n el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio, se garantizará el derecho al debido proceso que la Constitución Política y este Código consagran”.

Por lo tanto, considero que era esencial prestarle atención al artículo 34 constitucional, en el que se concibe la acción de extinción de dominio de forma muy restrictiva, en la medida en que procede únicamente sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito y que, además, causaren perjuicio al patrimonio público o grave deterioro de la moral social. En ese sentido, en la Sentencia C-740 de 2003, esta corporación advirtió que la extinción de dominio “procede cuando el dominio se ha adquirido por actos de enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social y ello es así con independencia de la adecuación o no de tales hechos a un tipo penal”.

Adicionalmente, resulta inconcebible que la extinción de dominio que se puso de presente en el caso concreto se haya justificado en una argumentación discriminatoria y con un claro componente de estereotipos de género, pues se señaló que la propietaria del inmueble incumplió con sus deberes “como madre” porque “no actuó de forma diligente en el cuidado de su heredad, en la medida (sic) que la necesidad de cumplir una extensa jornada laboral no le imposibilitaba vigilar qué hacían sus hijos [...], por lo menos en los momentos

en que compartía con ellos, bien cuando regresaba a su residencia luego del trabajo o los días martes o miércoles que descansaba”. El razonamiento descrito no solo es insuficiente para declarar la extinción de dominio, sino que se fundamenta en un claro desconocimiento de la realidad que enfrentan las madres a nivel nacional<sup>1</sup> y de las particularidades sobre las cuales se estructura la relación maternofilial, la cual puede dar primacía a valores como, por ejemplo, la confianza y el diálogo, por encima de otros como la vigilancia y el castigo.

Ahora, en relación con las pretensiones dirigidas contra la SAE, encaminadas a que la entidad respetara las garantías mínimas de los derechos humanos al llevar a cabo el desalojo, la Sentencia T-454 de 2023 concluyó que se configuró la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente. Sin ignorar el hecho de que la solicitante y sus hijos hayan conseguido proteger sus derechos fundamentales, concretamente el de vivienda, al arrendar un nuevo inmueble en donde vivir, de esto no se deriva que no haya habido una vulneración de sus derechos y, por lo tanto, la Sala no debió abstenerse de estudiar si la SAE, en el marco del cumplimiento de sus funciones, respetó las garantías procesales en la diligencia de desalojo. Entonces, era necesario hacer un pronunciamiento de fondo que, como lo mencioné, agrupara el análisis respecto de la sentencia que originó la presunta y continua vulneración de los derechos fundamentales de la solicitante.

Por estas razones me aparto de una decisión que, en síntesis, no se pronunció de fondo sobre el caso concreto, como debió hacerse. Pues, al fragmentar el estudio del requisito de inmediatez, no constató que en realidad se trataba de una única vulneración que permaneció en el tiempo y se originó en una sentencia que no solo descuidó la jurisprudencia de esta corporación, sino que justificó una extinción de dominio de un inmueble en argumentos insuficientes y con una gran incidencia de componentes discriminatorios y estereotipos de género.



ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO  
Magistrado

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **aa32e7a5a817cf2f72afe04be9ab7dc8e86e14e1fac80fe5dee33c4babb3c03a**

Verifique este documento electrónico en: <https://siicor.corteconstitucional.gov.co/firmaelectronica/validararchivo.php>

---

<sup>1</sup> El hecho de que recaiga en las mujeres la responsabilidad del hogar hace que estas tengan que asumir una doble carga laboral, pues además de las actividades remuneradas, realizan actividades de cuidado no remuneradas.